

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 01 DE COSLADA
C/ Colombia, 29, Baja - 28820
Tfno: CIVIL 916695580, PENAL 916695472
Fax: PENAL 916258643

42020310

NIG: 28.049.41.2-2009/0002989

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 394/2009

Demandante: D./Dña.

3.

PROCURADOR D./Dña.

D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.

D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.

D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.

Demandante / Demandado: ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID

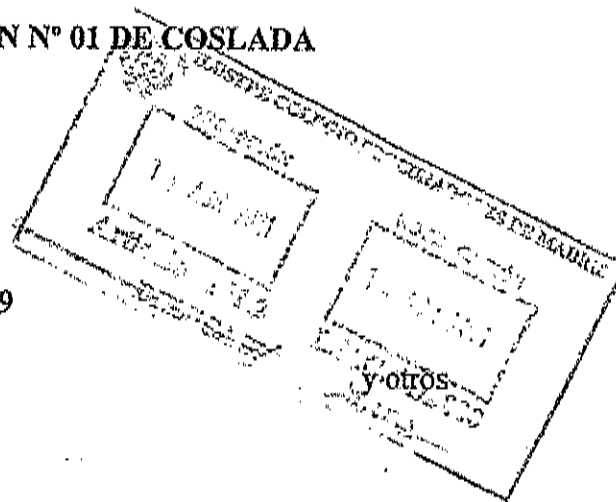
PROCURADOR D./Dña.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA

PROCURADOR D./Dña.

D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.



SENTENCIA Nº 60/2021

En Coslada, a 11 de abril de 2021, Vistas por el Magistrado-Juez Oscar Crespo Nagore las presentes actuaciones del Juicio Ordinario nº 394/2009 en el que aparecen como demandantes D.

, Dª.
, defendidos por el letrado D.
representados por la procuradora Dª.

Dª.
y D.

, y
la

D.

D.

D.

D.

D.

y Dª.

Dª.
D.

Dª.

defendidos por el letrado D.
procuradora Dª.

y D.

y representados por la
defendido por

la letrada Dª. y como demandados el ILUSTRE
COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, defendido por el letrado D.
, y representado por la procuradora Dª.

, y el CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE
ESPAÑA, defendido por la procuradora Dª. y defendido
por el letrado D.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora de los tribunales, D^a.
en nombre y representación de D.

D^a.

, D^a.

y D.

, interpuso demanda de Juicio Ordinario contra el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID y el CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA alegando los hechos y fundamentos que a su derecho consideró convenientes. Solicitó que se admitiera a trámite la demanda y tras los trámites legales pertinentes, se dictara por este juzgado sentencia por la que se estimen sus pretensiones, con imposición de las costas del presente procedimiento a la parte demandada.

SEGUNDO.- Dado traslado a las partes demandadas para que contestaran, ambas presentaron escrito de oposición.

TERCERO.- La

D^a.

, D.

, D.

D.

, D.

D.

, D^a.

D.

y D^a.

, solicitaron la Intervención Voluntaria Adhesiva Litisconsorcial a la demanda interpuesta, que fue inicialmente rechazada por autos de este juzgado de 6 marzo de 2015 y de 1 de junio de 2015, y posteriormente admitida por auto de 31 de marzo de 2017 de la Sección 11^a de la Audiencia Provincial de Madrid. Posteriormente, D. solicitó la intervención en idénticos términos, que fue admitida por auto de 8 de julio de 2020 dictado por este Juzgado.

CUARTO.- Posteriormente se convocó a las partes para que acudieran a la celebración de la Audiencia Previa, en la cual, tanto las demandantes, como las demandadas se ratificaron en su escritos iniciales, y propusieron la prueba que a su derecho consideraron conveniente, siendo admitida la pertinente.

En la vista, tras la práctica de la prueba de autos, las partes se ratificaron en sus iniciales escritos; quedando todo grabado en el correspondiente soporte audiovisual.

QUINTO.- La presente resolución ha sido dictada por este juzgador en virtud del art.194 de la LEC; tras interrumpirse la inicial vista celebrada bajo su dirección el 26 de septiembre de 2018, cuando era el titular del juzgado, debido a la incomparecencia de un testigo, se reanudó el 26 de marzo de 2021 para la práctica de dicha prueba, encontrándose en dicha fecha destinado en otro juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte demandante la acción de nulidad del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, de 1 de julio de 2004, por el que se aprobó el Reglamento de Cuota Colegial Ordinaria, con un nuevo sistema de cuotas colegiales, a través de la Propuesta 1, "Financiación por Cuota Fija y Cuota Variable", por entender que su elaboración y aprobación incurre en varias infracciones y vulneraciones que necesariamente deben conllevar su anulación, y que se pueden resumir en las siguientes: 1). Infracción del principio de reserva de ley material del art.31 de la Constitución Española, por cuanto entiende que la relación que une al procurador con el colegio respectivo es de carácter jurídico-pública, por el carácter obligatorio de la adscripción a colegio para el ejercicio de la profesión, por lo que la cuota colegial reviste el carácter de una prestación patrimonial de derecho público, y por ello no es posible que el art.6,3 letra f) de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se limite a remitirse a lo que dispongan los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior de los Colegios sobre materias relativas al régimen económico y financiero y exacción de cuotas y otras percepciones, cuando el art.15, 1 y 2, letra h) de la Ley 19/1997 de 11 de Julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid indica en el apartado 1 que los Colegios Profesionales elaborarán y aprobarán sus Estatutos de forma autónoma y sin más límites que los interpuestos por las Leyes; estableciendo, en relación con lo establecido en el apartado 2 que indica que los Estatutos de los Colegios Profesionales deberán tener, como mínimo, un régimen económico y financiero; 2), refieren que la habilitación concedida por el art.6 de la Ley 2/1974 no ampara que se pase en bloque a cada uno de los colegios la potestad otorgada solo al Consejo General de Procuradores de España en virtud del Estatuto General de Procuradores; 3). Ausencia de motivación del Acuerdo de la Junta del Colegio, por ausencia de Actas de la Comisión de Financiación y de la Reunión Informativa de 28 de junio de 2004 que precedió a la Junta 4). Infracción del principio de reparto equitativo de cargas de los colegiados establecido en los Estatutos del Colegio, por infracción del principio de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y 5). Infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en el sistema de control de la cuota variable. Sobre ello interesa en el suplico de la demanda se declare la nulidad del referido Reglamento, así como la nulidad de los impresos relativos a la exacción y control de la cuota colegial, y de los ficheros creados por el Colegio para el control de la cuota variable. Acción de nulidad que dirige frente al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y frente al Consejo General de

Procuradores de España. Por último, de conformidad con lo establecido en el art.35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, interesa se plantee por el órgano judicial Cuestión de Inconstitucionalidad del art.6,3, letra f), de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y del art.15, apartados 1 y 2, letra h) de la Ley 19/1997 de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.

De otro lado, la _____, solicita igualmente se declare la nulidad del acuerdo referido, por ser nulo de pleno derecho en base a las causas que detalla en el suplico de su escrito de solicitud de Intervención Voluntaria Adhesiva.

Las partes demandadas, tanto el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid como el Consejo General de Procuradores de España se oponen a lo pretendido de contrario por entender que el Acuerdo y Reglamento Impugnado no incurren en ninguna de las causas de nulidad invocadas de contrario.

SEGUNDO.- En primer lugar, y antes de nada, a los efectos de centrar el objeto de debate y controversia, y sobre el que debe versar la presente resolución, debe indicarse que únicamente se van resolver las pretensiones de nulidad de la inicial demandante, por cuanto la _____ y el resto de intervinientes fue admitidos en el presente procedimiento ocupando la misma posición que la inicial demandante, pero sin posibilidad de ampliar el objeto ni la pretensión deducida; así lo estableció de forma expresa el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 31 de marzo de 2017, que estimó el recurso de apelación interpuesto por dicha parte contra el auto de 1 de junio de 2016, que desestimaba recurso de reposición del auto de 6 de marzo de 2015 que no admitía dicha intervención; así lo dice en el último párrafo del Razonamiento Jurídico Segundo: *“ En estas condiciones la Sala estima procedente acordar la intervención solicitada, considerando que los intervinientes tiene legítimo y directo interés para ello, con la única precisión de que el objeto del proceso es el que resulta de la demanda interpuesta a la que los intervinientes se adhieren, sin posibilidad de ampliar este objeto ni la pretensión deducida, y sin que haya de declararse nulidad ni retroacción alguna habida cuenta de que se han remitido al tribunal todos los autos, de modo que lo procedente es tener por cumplido el trámite del art.13,3 LEC mediante traslado a las demandadas del escrito de solicitud de intervención, verdadero escrito alegatorio, y proseguir el procedimiento por sus trámites mediante convocatoria de la audiencia previa”*; indicando expresamente que a las demandadas únicamente había que remitir a las partes demandadas el escrito de solicitud de intervención, de hecho, solo consta contestación a la demanda de los iniciales demandantes; resolución que debe ser respetada, sin que quepa efectuar mayores consideraciones al respecto, pues lo contrario, entrar a resolver aquellos motivos de nulidad alegados por la _____, distintos de los de la demanda inicial, respecto de los que las partes demandadas no han tenido oportunidad de contestar y oponerse en forma, incurría en vicio de incongruencia de la presente resolución del art.218 de la LEC, al no respetar las normas de la litispendencia de los art.410 a 414 de la LEC.

TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto propiamente dicho, a continuación, se van a ir dando respuesta a los motivos de Nulidad esgrimidos en la demanda, y que pueden ser resumidos en los siguientes:

Primer motivo. Infracción del principio de reserva de ley material del art.31 de la Constitución Española. Debe ser desestimado, por cuanto esta cuestión ha sido ya resuelta por varias sentencias del Tribunal Supremo, las sentencias de 13/3/1987 y de 28/2/2011 consideraban a los Colegios Profesionales como Corporaciones Sectoriales de Base Privada, con naturaleza mixta, en el sentido de que aunque los procuradores actúan como agentes descentralizados de la administración pública, por la labor de interés público que desempeñan, y en consecuencia, los colegios, estos constituyen un grupo de personas asociadas en torno a una finalidad común, que es la defensa de sus intereses privados, lo que determina que la relación que une a cada colegiado con el colegio es la de un contrato bilateral colegiado-colegio, según la STS de 8/4/1992, y a que la cuota colegial no sea considerada como una exacción pública, sino una obligación derivada del contrato bilateral, según la STS de 12/12/2000:” **OCTAVO.-** En el motivo tercero, al amparo del artículo 95.1.4º, por infracción del artículo 14.16 del Estatuto General de los Procuradores, se alega, en síntesis, que: a) según el artículo 31.3 de la Constitución sólo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley; b) el artículo 6.3.f) de la Ley de Colegios únicamente se refiere al régimen económico y financiero y fijación de cuotas y otras percepciones, pero no autoriza ni siquiera indirectamente a establecer una exacción tan singular como la relativa a los sellos de acepto; los sellos de aceptación no pueden considerarse como cuota, ni como cargas obligatorias; c) el artículo 59.c) del Estatuto no contempla deber alguno del Procurador, sino simplemente menciona el importe de los sellos como ingresos ordinarios del Colegio si el cliente abona voluntariamente dicho importe, dado que va destinado a una entidad distinta del colegio; d) el artículo 14.16 del Estatuto General excluye un eventual deber profesional de los Procuradores de abonar con cargo a su patrimonio el importe de los sellos de acepto; el acepto ni siquiera es exigido por el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de febrero de 1990 califica de superflua la diligencia de bastanteo.

NOVENO.- Un primer nivel argumentativo parece cuestionar la legitimidad de las cargas económicas impuestas colegialmente sin hallarse previstas directamente en la Ley, especialmente en cuanto pudiera ser contrario al principio de legalidad en la imposición de las cargas públicas establecido en el artículo 31 de la Constitución, con arreglo al cual «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley».

Como hemos declarado, entre otras, en sentencia de 26 de enero de 1999, dictada en recurso de casación número 5031/1994, el artículo 36 de la Constitución, al establecer que «La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos», da soporte al reconocimiento de la existencia de la autonomía profesional que se organiza en la Ley de Colegios Profesionales a través de una organización colegial caracterizada por las notas propias de las corporaciones públicas sectoriales de base privada. Esta organización corporativa de las profesiones permite a la Ley atribuir a los organismos colegiales potestades públicas y una amplia autonomía normativa sin suprimir la base privada de sus componentes y de sus actividades en defensa de los intereses profesionales.

En el ámbito de la autonomía financiera, este principio tiene reconocimiento en el artículo 6.3.f) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con arreglo al cual «Los estatutos generales regularán las siguientes materias: f) Régimen económico y financiero y fijación de cuotas y otras percepciones y forma de control de los gastos e inversiones para asegurar el cumplimiento de los fines colegiales». A su vez, el apartado 4 añade que «Los Colegios elaborarán, asimismo, sus Estatutos particulares para regular su funcionamiento. Serán necesariamente aprobados por el Consejo General, siempre que estén de acuerdo con la presente Ley y con el estatuto general».

La sentencia de esta Sala de 13 de marzo de 1987, aceptando la consideración de los colegios como corporaciones sectoriales de base privada, es decir, como grupos de personas asociadas en atención a una finalidad común, considera que ha de partirse de la idea de que su núcleo fundamental radica en la defensa de intereses privados, aunque sobre esta base privada se les encomienden funciones públicas, y reconoce que se produce un fenómeno de autoadministración, por cuya virtud tales colegios actúan como agentes descentralizados de la Administración Pública, ejerciendo facultades administrativas sobre sus propios miembros.

Desde este punto de partida, en cuanto al problema de la naturaleza jurídica de las cuotas colegiales, subraya que la doctrina mayoritaria entiende que tales cuotas no constituyen exacciones públicas sometidas al principio de la legalidad tributaria - art. 133 de la Constitución- y afirma que la jurisprudencia ha mantenido también dicha tesis (sentencias de 9 de diciembre de 1981 y 16 de mayo de 1983).

No se aprecia, desde este primer punto de vista, que la sentencia recurrida infrinja los preceptos citados como infringidos al afirmar que la obligatoriedad del pago de los conceptos referidos se reconoce legalmente en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con las modificaciones introducidas por la ley 74/1978, de 26 de diciembre, cuyo artículo 6 remite a lo que dispongan los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior sobre las materias relativas a los derechos y deberes de los colegiados y régimen económico y financiero y exacción de cuotas y otras percepciones y forma de control de los gastos e inversiones, y que la normativa expuesta deja un amplio campo a las previsiones estatutarias de los Colegios en la determinación de su régimen económico.

También cabe hacer referencia a las sentencia de STS de 12/2/2011, en el sentido de que indica que no debe confundirse el interés público que debe ser cubierto con un determinado aparato administrativo, en este caso, los colegios profesionales, con los intereses privados de los colegiados que forman parte del mismo, los cuales deben administrarse a través de la propia corporación, con las cuotas colegiales, salvo el caso de la asistencia jurídica gratuita que prestan los procuradores, lo que sí se sufraga con fondos públicos.

CUARTO.- Segundo Motivo. Falta de Competencia del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para establecer las contribuciones económicas de sus colegiados. en el sentido de que art.6 de la Ley 2/1974 no ampara que se pase en bloque a cada uno de los colegios la potestad otorgada solo al Consejo General de Procuradores de España en virtud del Estatuto General de Procuradores. La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 28 de septiembre de 2005, trató este tema, de si esta potestad corresponde en exclusiva al estado, y por ello, deben ser o no los Consejos Generales de los Colegios los únicos que pueden regular, en concreto, en el FUNDAMENTO DE

DERECHO PRIMERO, en el que acerca de las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Consejos Generales y de los Colegios Profesionales, establece la doctrina siguiente:

a') *El artículo 21 del proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (RCL 1983, 2227) (cuyo contenido es equivalente al vigente artículo 15 de la Ley del Proceso autonómico, LPA, en adelante) se ajusta a la Constitución, pero para su aprobación no puede utilizarse la técnica armonizadora (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 [RTC 1983, 76]).*

b') *La disposición transitoria de la LPA, en relación con su artículo 15.3, refleja la voluntad del legislador de mantener la existencia de los Consejos Generales existentes en el momento de la entrada en vigor de la LPA. No puede significar una congelación sine die (por tiempo indefinido), por hallarse sometida a la voluntad del legislador estatal, de la regulación de los Consejos Generales (sentencias del Tribunal Supremo 21 de septiembre de 1999).*

c') *En las competencias de los Consejos Generales ha incidido la normativa posterior, tanto estatal como autonómica, derivada de la nueva organización territorial del Estado. Del artículo 15.3 de la LPA (RCL 1983, 2227) y de su disposición transitoria se deduce que en manos de los Consejos Generales de naturaleza estatal perviven aquellas funciones que no pertenecen al ámbito de competencias autonómicas, principio que se erige como clave para su determinación (sentencias de 14 de marzo de 1996 [RJ 1996, 2434], 15 de noviembre de 1996 [RJ 1996, 7949] y 22 de marzo de 1999 [RJ 1999, 2842]).*

d') *Las competencias autonómicas incluyen la creación de Consejos autonómicos, además de los restantes aspectos relativos a la regulación de los colegios profesionales y de otras corporaciones sectoriales de base privada. Unas Comunidades han asumido con carácter general las competencias relativas a las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses profesionales, y otras lo han hecho con carácter específico, con relación únicamente a los Colegios Profesionales. Las primeras han asumido dichas competencias con sujeción a los criterios básicos fijados por el Estado, y las otras, conforme a la legislación general o con el límite que resulta de los artículos 36 y 139 de la Constitución (RCL 1978, 2836) (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 [RTC 1983, 76] y sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1999). Las modificaciones de los Estatutos de Autonomía han dado lugar también a supuestos de asunción de competencia sobre colegios profesionales en el marco de la legislación básica estatal (v. gr. artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León [RCL 1983, 405 y LCyL 1983, 393], modificado por Ley Orgánica 4/1999 [RCL 1999, 55 y LCyL 1999, 21]).*

e') *No obstante ello, los Consejos Generales siguen teniendo diversas y variadas funciones en relación con el ejercicio de la correspondiente profesión, dentro de las amplias posibilidades abiertas por los títulos competenciales estatales (sentencia de 22 de marzo de 1999).*

f') *Corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias las Corporaciones de Derecho público representativas de intereses profesionales con fundamento en el artículo 149.1, 18º, de la Constitución, cosa que permite entender que la Ley a que se refiere el art. 36 ha de ser estatal en cuanto a la fijación de criterios básicos en materia de organización y competencia de las Corporaciones públicas profesionales, si bien este último artículo no puede ser entendido como norma atributiva de competencia legislativa plena al Estado (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 [RTC 1983, 76] y 20/1988 [RTC 1988, 20]).*

g') *La reserva de Ley para la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas (artículo 36 CE [RCL 1978, 2836]), comporta que sea la Ley la que regule: 1º) la existencia misma de*

una profesión titulada, es decir, de una profesión cuya posibilidad de ejercicio quede jurídicamente subordinada a la posesión de títulos concretos, 2º) los requisitos y títulos necesarios para su ejercicio y 3º) su contenido, o conjunto formal de las actividades (sentencias del Tribunal Constitucional 83/1984 [RTC 1984, 83] , 42/1986 [RTC 1986, 42] , 93/1992 [RTC 1992, 93] y 111/1993 [RTC 1993, 111]).

h) El criterio para determinar qué intereses profesionales son los que pueden referirse a las funciones de los consejos generales es el de su repercusión o interés estatal. El carácter ligado al ámbito o repercusión nacional parece que puede ser proyectado sobre aquellos aspectos en los que concurren especiales exigencias de igualdad entre todos los profesionales que ejerzan en España una determinada profesión, por lo que debe dirigirse en primer término la mirada sobre aspectos generales de organización, regulación y deontología profesional en los que pueda apreciarse tal exigencia, por revelarse como indispensable una ordenación general, tanto en el aspecto pasivo o de igualdad de trato de los profesionales, como en el aspecto activo o de igualdad de prestación del ejercicio profesional respecto a los ciudadanos a los que se refiera. Pero también parece que la existencia de una necesidad de igualdad de trato o de actuación (rasgo que justifica la unidad de la ordenación y permite calificar determinados aspectos concretos relacionados con los conceptos anteriores como de ámbito o repercusión nacional) no puede ser proclamada con carácter general o abstracto, sino que debe ser ponderada en función del entorno y necesidades propias y de las características y circunstancias particulares en las que se desenvuelve cada profesión, para cuya ponderación puede ser muy útil el examen de sus estatutos, así como, en función de las exigencias de unidad de actuación que la sociedad puede reclamar de los profesionales en determinados aspectos de especial importancia y sensibilidad, el estudio de la normativa estatal propia del sector de actividades en que tal función eventualmente puede desenvolverse (sentencia de 20 de diciembre de 1999).

i) Subsisten las facultades que vienen atribuidas a los Consejos Generales por el artículo 9 de la Ley de Colegios Profesionales para la elaboración de sus Estatutos, en tanto que ello no suponga inmisión en las nuevas facultades atribuidas a los Colegios de rango territorial inferior que hubiesen pasado a depender de las Comunidades Autónomas respectivas (sentencia de 20 de diciembre de 1999).

j) No es defendible, por ello, que la LPA (RCL 1983, 2227) ha abolido el régimen aplicable a los consejos generales, privándoles de toda competencia, salvo la estricta de representación de la profesión en el ámbito del Estado (sentencia de 21 de septiembre de 1999 [RJ 1999, 7929] y 20 de diciembre de 1999 [RJ 1999, 9472]).

k) En términos generales, la competencia de los Consejos Generales para proponer los Estatutos Generales de una profesión y del Gobierno para aprobarlos se halla reconocida en el artículo 9 b) LCP. Esta competencia se halla comprendida en el marco transitorio reconocido en la disposición transitoria de la LPA, en relación con el artículo 15. Esta Sala ha admitido que las exigencias de igualdad entre todos los profesionales que ejerzan en España una determinada profesión, puede proyectarse en primer término sobre aspectos generales de organización, regulación y deontología profesional en los que pueda apreciarse tal exigencia, reservándose como indisponible una ordenación general, en concretos aspectos y atención a circunstancias concretas de cada profesión (STS 25 de febrero de 2002, recurso núm. 125/1999 [RJ 2002, 10973]).

Por tanto, el Estado no se encuentra desapoderado de todo título competencial en relación con los Colegios Profesionales. El que la Constitución no reconozca directamente al Estado competencia normativa para fijar el régimen jurídico de los colegios profesionales no significa que aquél carezca de todo título habilitante para intervenir en esta materia, ni tampoco que el grado de competencia estatal sea sólo el que resulta de los propios términos de los Estatutos de Autonomía,

de tal manera que el Estado carezca de toda competencia legislativa cuando dicho Estatuto realice una asunción íntegra y exclusiva de las facultades y funciones (STC 20/1988, de 18 de febrero [RTC 1988, 20]). Por el contrario, la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado la existencia de competencias estatales con incidencia en materia de Colegios profesionales. Y así: 1º) en la medida en que se configuran normativamente como Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses profesionales, resulta justificado que en lo que atañe a su constitución y a la realización de funciones públicas, el régimen jurídico básico corresponde establecerlo al Estado conforme al artículo 149.1.18 CE (RCL 1978, 2836) , o, dicho en otros términos, es la legislación básica estatal la que establece el régimen jurídico de aquellos aspectos en los que los Colegios Profesionales puedan ser considerados como Administraciones públicas en este sentido el artículo 15.2 LPA dispone que "las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses profesionales que existen o se constituyan en el territorio de cada Comunidad Autónoma, ajustarán su organización y competencias a los principios y reglas básicas establecidas en la legislación del Estado para dichas Entidades, sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que pudiera atribuirles o delegarles la Administración Autonómica"; 2º) la relación existente entre los Colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas tiene su reflejo en el propio artículo 36 CE, que refiere conjuntamente a aquéllos y a éstas la reserva de Ley, de manera que también por el título que representan tales profesiones ostenta el Estado determinadas competencias (art. 149.1.30 CE); y 3º) la competencia estatal sobre la defensa de la competencia y para la fijación de las bases de la ordenación de la actividad económica en el sector concreto de los servicios profesionales (art. 149.1.6ª, 8ª y 13 CE) puede tener también incidencia en el régimen de los Colegios Profesionales.

Corresponde a las Comunidades Autónomas que han asumido competencia en relación con los Colegios Profesionales dictar la normativa de desarrollo y ejercer las competencias de ejecución. En el bien entendido de que la necesidad de un marco normativo completo supone el que a falta de normas autonómicas o por insuficiencia de éstas, la normativa estatal despliegue la eficacia supletoria que le es propia en todo aquello que no tiene carácter de base de organización, funcionamiento y competencia de los Colegios Profesionales. Esta regulación complementaria es plenamente compatible con los postulados constitucionales, pues si bien la regla de la supletoriedad del Derecho estatal no es un cláusula o título universal atributivo de competencia para legislar cualquier materia a favor del Estado, no cabe ignorar la función que aquélla desempeña en cuanto proporciona un criterio en orden a la aplicación de las normas del actual Estado compuesto que configura la Constitución (SSTC 157/1989, de 26 de enero [RTC 1989, 157] y 103/1989, de 8 de junio [RTC 1989, 103]).....

De los principios expuestos pueden extraerse dos conclusiones. En primer término, no puede considerarse nula con carácter absoluto la aprobación de unos Estatutos Generales de una determinada profesión propuesto por el Consejo General correspondiente. Y, en segundo lugar, el establecimiento de un régimen corporativo básico en los Estatutos Generales no es obstáculo para que la legislación autonómica pueda habilitar a los Colegios para proponer o aprobar regulaciones en aspectos complementarios y pueda por sí misma establecer regulaciones generales.

Y en idéntico sentido, las STS de la de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 25 febrero 2002, y 9 de febrero de 2004. Sobre ello, igualmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha resuelto en el mismo sentido, sirviendo de ejemplo la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, sentencia núm. 2015/2009 de 13 noviembre, que dice en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO: "Como hemos dicho ya analizando anteriores preceptos

impugnados y señalan las sentencias de 25 de febrero de 2002 (RJ 2002, 10973) y 9 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1917) a que nos venimos refiriendo «la organización de los Colegios es susceptible, sin merma de la igualdad de trato y de la actuación profesional de los colegiados de ser desarrollada de forma diversa en las distintas regulaciones autonómicas y estatutarias, atendiendo a las características propias de cada comunidad y ente colegial así como a la autonomía organizativa que corresponde a éstos»...". En el fundamento de Derecho décimo se estudia y resuelve la impugnación de los arts. 105 a 107, integrados en el Capítulo IV del Estatuto general de los Procuradores, y entre ellos claro está se encuentra el 106.1 e) cuya nulidad considera la sentencia apelada es causa determinante de la estimación del recurso al considerar con la sentencia del Tribunal Supremo que alude que "...no cabe que el Consejo General regule en términos tan amplios y abstractos el régimen económico, pasando en bloque a cada uno de los Colegios la potestad otorgada por la Ley sólo al primero, por vía del Estatuto General...", pronunciándose la Sala en los siguientes términos: "...Los preceptos cuya anulación ahora contemplamos tratan de una materia, como es el régimen económico de los Colegios, susceptible, como ya ha dicho este Tribunal Supremo entre otras en las dos sentencias tantas veces mencionadas de 25 de febrero de 2002 y 9 de febrero de 2004, de ser desarrollada sin merma de la igualdad de trato y de actuación profesional de los colegiados, de forma diversa en las distintas regulaciones económicas y estatutarias, atendiendo a las características propias de cada comunidad y de cada ente colegial y a la autonomía organizativa que corresponde a éstos. En consecuencia, y por tales razones, los arts. 105 a 107 son nulos en cuanto sean de aplicación directa a los Colegios pertenecientes al ámbito autonómico...", de donde se desprende, junto a las consideraciones que hemos venido recogiendo, que la doctrina más actual del Tribunal Supremo considera que el régimen económico de los Colegios Profesionales es susceptible de ser desarrollado de forma diversa en las distintas regulaciones autonómicas y estatutarias, atendiendo a las características propias de cada comunidad. Que ello es así lo corrobora la normativa autonómica que se ha ido dictando en esta materia, normativa entre la que se encuentra la Ley 19/1997, de 11 de julio (LCM 1997, 243), de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo décimo quinto, al regular los Estatutos de los Colegios de ámbito autonómico, dispone que en ellos se establecerá su régimen económico, respetándose de esta forma, como se afirmaba en la sentencia transcrita, el principio de reserva de ley a que alude el recurrente. Debemos por todo ello concluir que la atribución a estos Colegios de ámbito territorial autonómico de la posibilidad de fijar las cuotas variables según las peculiaridades propias de su ámbito es ajustada a Derecho y la resolución recurrida, que aplica el artículo 20.1 c) del Estatuto General al no haber sido abonadas las cuotas variables, es ajustada a Derecho, procediendo por ello la estimación del recurso de apelación, la anulación de la sentencia y la confirmación del acto impugnado.

Siguiendo la misma doctrina, las Sentencias del citado Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de septiembre de 2014, 28 de abril de 2014, 7 y 10 de febrero de 2014, 19 de diciembre de 2013, 16 de diciembre de 2011 y 28 de octubre de 2011; aplicando toda esta doctrina al caso de autos, podemos concluir que es perfectamente posible que la normativa autonómica, en este caso, los art.14 y 15,2 de la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, regule el temas de las aportaciones económicas de los colegiados. Clarificadora resulta la Sentencia núm. 1043/2012 de 14 septiembre: "**SEPTIMO.-** Respecto a la alegación de falta de cobertura legal de la cuota colegial obligatoria variable, como apunta la parte apelada, la cuota colegial variable tiene la necesaria cobertura legal para su aplicación y así ha sido declarado por la sección octava de esta sala, en sentencia de fecha 13 noviembre 2009 (JUR 2010, 37524), recurso 1281/2009, ponente don Gregorio del Portillo García, o la citada de esta misma sección de 16 diciembre 2011, recurso 1443/2011, ponente don JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA. En contra de lo que sostiene el recurrente, no corresponde al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España la competencia exclusiva para establecer las cuotas colegiales y así lo considera el Tribunal Supremo en la conocida Sentencia de 28 de Septiembre de 2005 (JUR 2012, 201634) (Rec. 13/2003, Ponente Excm. Sra. Margarita Robles Fernández), llegando a la conclusión de que el establecimiento de cuotas por parte de los Colegios Territoriales y no por el Consejo, se encuentra ajustado a Derecho.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2003 (RJ 2003, 2643) , ha quedado superada por le criterio que sienta la citada de 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8211) , que hace mención a la de fecha 25 de febrero de 2002 (JUR 2004, 216008) y a otras anteriores, sentando Jurisprudencia de acuerdo con el artículo 1.6 del Código Civil (LEG 1889, 27) . Insistiendo en los razonamientos que se exponían en el escrito de contestación a la demanda, es claro que el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ostenta potestad para establecer, mediante normativa interna, su régimen económico y financiero y los mecanismos para exigir las aportaciones económicas de los colegiados, pues el artículo 106 del Estatuto General de los Procuradores aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre (RCL 2002, 2993) , no incurre en causa de nulidad por infracción del principio de jerarquía normativa.

QUINTO.- Motivo Tercero. Ausencia de Motivación del Acuerdo de la Junta Extraordinaria del 1 de julio de 2004, por la ausencia de Actas de la Comisión de Financiación y de la Reunión Informativa previa del 28 de junio de 2004; debe ser igualmente desestimado. Los doc. 13, 17 y 18 de la contestación del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid(folios 176 a 1719) lo desmienten; el documento 13 constituye una Circular en la que se informa que se ha disuelto la última comisión de financiación ante la no aprobación del nuevo sistema el 24 de julio de 2003, y que se va a proceder a crear una nueva, con la posibilidad de formar parte de la misma a aquel colegiado que lo desee; por otro lado, los documentos 17 y 18 constituyen Actas de la Reunión de Junta de Gobierno del 22 de abril y de 8 de junio de 2004, convocándose en esta última a la reunión informativa de 28 de junio, y a la Junta General Extraordinaria de 1 de julio para la votación de las propuestas de financiación elaboradas por la comisión de financiación, con reflejo de las mismas; y el documento 19 lo forma la convocatoria a dicha Junta General en el que igualmente se hace referencia a las propuestas, y se anexa el Reglamento de Cuota Colegial Ordinario finalmente aprobado.

SEXTO.- Motivos Cuatro y Cinco. El sistema de Cuotas Infringe el principio de reparto equitativo de cargas de los Estatutos del Colegio, y los principios de igualdad, seguridad jurídica, e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Debe desestimarse, toda vez que dicho sistema ha sido confirmado por numerosas sentencias, que refieren que dicho sistema es conforme a derecho, por no incurrir en infracción alguna de norma estatutaria y legal, siendo la valoración de la capacidad a tener en cuenta la profesional, es decir, en función del volumen de trabajo desarrollado, no la capacidad económica personal y general del art. 31, 1 de la Constitución Española; con la cobertura legal de la Ley 19/97 de Colegios de la Comunidad de Madrid, en sus arts. 14 y 15 que facultan al Colegio de Procuradores para establecer las cuotas y exigir aportaciones económicas de los colegiados así como para establecer en sus Estatutos las causas de suspensión y pérdida de la condición de colegiados.

Y se debe volver a citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª), Sentencia núm. 1043/2012 de 14 septiembre: “ **SEPTIMO.-***La competencia de los Colegios Profesionales autonómicos, como el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, para establecer*

su sistema de financiación es clara, pues la Comunidad de Madrid tiene asumidas competencias en materia de Colegios Profesionales, de acuerdo con las normas siguientes:

a.- La Ley 2/1974(RCL 1974, 346) , de Colegios Profesionales, es una Ley preconstitucional, que fue adaptada posteriormente a la Constitución, en algunos de sus aspectos, por las siguientes disposiciones: Ley 74/1978, de 26 de diciembre (RCL 1979, 76) ; Ley 7/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 880) , de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales (Disposición Final Segunda); Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio (RCL 2000, 1404) (artículo 39) y, por último, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (RCL 2009, 2556) , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (artículo 5).

b.- Ha de tenerse en cuenta igualmente en esta materia, lo que dispone el artículo 15.2 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre (RCL 1983, 2227) , del Proceso Autonómico , según la cual, los Consejos y Colegios Profesionales, han de ajustarse en su organización a las reglas básicas establecidas en la legislación del Estado. Y la Disposición Final Segunda de la Ley 7/1997, de 14 de Abril (RCL 1997, 880) , sobre Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales , al amparo de las cláusulas 1a, 8', 13', 18a y 23a del artículo 149 de la Constitución (RCL 1978, 2836) , dispone que tienen carácter de legislación básica los artículos 2.1, 3.3 y 51). p) y q) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero (RCL 1974, 346) , reguladora de los Colegios Profesionales.

..... En consecuencia, el régimen jurídico de los Colegios \ Profesionales de la Comunidad de Madrid, está integrado por la legislación básica del Estado, contenida en la Ley de Colegios Profesionales y por la normativa que, en desarrollo de la misma, dicte la Comunidad de Madrid y tal desarrollo de competencias transferidas por el Estado, lo hace la Comunidad de Madrid aprobando la Ley 19/1997, de 11 de julio (LCM 1997, 243) , de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. El artículo 15 de la Ley 19/1997, de 11 de julio (LCM 1997, 243) , de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid , establece el contenido que han de tener los Estatutos de los Colegios Profesionales autonómicos, en los cuales ha de figurar el régimen económico y financiero. Por tanto este artículo 15 de la Ley de Colegios Profesionales (RCL 1946, 346) de la Comunidad de Madrid, atribuye competencias a estas Corporaciones para regular su régimen económico y financiero, así como para establecer las causas de suspensión o pérdida de la condición de colegiado, sin que el ejercicio de esas competencias incida en la reserva comprendida dentro de la legislación básica del Estado, a que antes se ha hecho referencia. Ha de tenerse en cuenta igualmente el artículo 14, apartado h) de la Ley de Colegios Autonómica (LCM 1997, 243) , que establece entre los fines de estas Corporaciones del de establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados. Por tanto este precepto incide también en la posibilidad de que los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid regulen las aportaciones económicas de los colegiados.

En el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley de Colegios Profesionales Autonómica (LCM 1997, 346) , el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid aprobó su Estatuto en el que regula la forma de establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados y las

consecuencias del incumplimiento de las obligaciones económicas de los colegiados. Así, el artículo 19.6 del Estatuto, atribuye a Junta de Gobierno la función de proponer a la Junta General el importe de las cuotas ordinarias que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales; y el artículo 35. e) del mismo Estatuto, atribuye a la Junta General Ordinaria de Colegiados la competencia para la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, y los artículos 38.1 y 39.c), establecen la competencia de la Junta General Extraordinaria para el tratamiento de los asuntos que la motiven a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o a instancia de un tercio de los colegiados.

.....En consecuencia, es de aplicación el artículo 56, 2. e) del Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que regula los ingresos ordinarios y extraordinarios del Colegio, establece como ingreso ordinario el importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como las derramas colegiales establecidas por la Junta de Gobierno y las cuotas extraordinarias que apruebe la Junta General.

.....El Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y el Reglamento de Cuota Colegial aprobado por la Junta General de colegiados de fecha 1 de julio de 2004, gozan de la necesaria cobertura legal, pues el Reglamento se encuentra aprobado por ese órgano colegial al amparo de lo que dispone la Ley 19/1997, de 11 de julio. (LCM 1997, 243), de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 14.h) establece como función de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid: "... h) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados". Esta Ley de Colegios Profesionales (RCL 1974, 346) Autonómica entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, es decir, el día 16 de julio de 1997, es decir, se encontraba vigente en el momento en que el Reglamento de Cuota Colegial de 1 de julio de 2004 se aprobó por la Junta General de colegiados.

La no publicación del Estatuto Colegial y del Reglamento de Cuota Colegial, no impide su aplicación la no publicación del Reglamento no impide su aplicación.

El Reglamento de Cuota Colegial no atenta contra lo que dispone la Ley 15/2007, de 3 de julio (RCL 2007, 1302) , ni la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256), de Defensa de la Competencia.

En idéntico sentido, sentencias del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de Madrid, de 13 de noviembre de 2009, 16 de diciembre de 2011, 1 de julio de 2011, 16 de septiembre de 2011, 12 de diciembre de 2011, 27 de enero de 2012, 28 de octubre de 2011, 18 de mayo de 2012, 5 de octubre de 2012, 14 septiembre de 2012, 14 de diciembre de 2012, 21 de junio de 2013, 10 de mayo de 2013, 17 de mayo de 2013, 28 de abril de 2014, y 10 de febrero de 2014.

SÉPTIMO.- Motivo Sexto. Ilegalidad de los Ficheros y de los Impresos utilizados por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para el cálculo de la cuota Variable y para el control de la misma por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos; al igual que los anteriores, merece su desestimación. El

Consejo General del Poder Judicial, remitió comunicación de 12 de julio de 2004, al Presidente del Colegio de Procuradores de Madrid en la que, a través de la Comisión de Organización y Modernización Judicial informaba que no existía obstáculo legal ni normativo alguno para informar favorablemente la solicitud del Colegio, a fin de que se facilitaran al Colegio de Procuradores de Madrid los datos procedentes de los registros de entrada de los Juzgados y Tribunales(doc.28 de la contestación); siendo posteriormente autorizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid(doc.30). Debe además tenerse en cuenta que existe una Resolución de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de 26 de febrero de 2008(doc.32), que reconoce la validez de los ficheros creados por el Colegio de Procuradores de Madrid. Dicho fichero, creado por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2003, fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 69, de 23 de marzo de 2005(doc.32 de la contestación a la demanda, y ha sido ha sido inscrito como de titularidad pública, tal y como la Resolución de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de febrero de 2008 arriba referido; así lo ha dicho también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª), Sentencia núm. 988/2013 de 21 junio: *"...la existencia de datos de carácter personal del recurrente en ese fichero, no necesita su consentimiento, pues según el artículo 6.2 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de febrero, de protección de datos de carácter personal : "2. no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencia; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. ...". Por tanto, si el fichero "obligaciones corporativas" es un fichero de carácter público, y la agencia de protección de datos de la comunidad de madrid lo ha calificado así, porque su finalidad contribuye al desempeño de las funciones que vienen encomendadas al colegio por la ley de colegios profesionales, la inclusión de los datos de carácter personal del recurrente incluidos en ese fichero y que sean necesarios para la finalidad del fichero, que es pública, no requieren el consentimiento del recurrente para su tratamiento, conforme a lo que establece el citado artículo 6.2 de la ley orgánica de protección de datos . No obsta a lo anterior las consideraciones del recurrente de que el fichero "obligaciones corporativas" debe ser un fichero de titularidad privada, pues la agencia competente lo ha calificado como de titularidad pública, al pretender el cumplimiento de funciones públicas del colegio, establecidas por la ley de colegios profesionales y el propio recurrente, con la documentación que acompaña a su escrito de demanda, presenta el informe de la agencia de protección de datos de la comunidad de madrid, de fecha 26 de febrero de 2008, en el que se dice: "... no cabe lugar a dudas de que el fichero denominado "obligaciones corporativas: cuotas" constituirá un claro ejemplo de fichero de titularidad pública, toda vez que a partir del mismo se pretende la "gestión de las obligaciones previstas en el estatuto corporativo (del colegio), función recaudatoria de fondos y sostenimiento económico del colegio", por cuanto que, en el presente supuesto, la ley atribuye expresamente al colegio la gestión sobre la materia de que se trata, a los fines indicados de competencias legales sobre los profesionales colegiados." Reiteradamente, la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de madrid, en casos idénticos al presente, ha venido declarando la inexistencia en estos casos de infracción de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, pudiéndose destacar, además de las sentencias citadas en este escrito y en el de contestación a la demanda, la dictada por su sección primera, de fecha 1 de julio de 2011, núm. 664 (jur 2011, 287521).*

En idéntico sentido, la sentencia de dicho Tribunal, de 17 de mayo de 2013. Y cabe mencionar además la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, el cual, en la sentencia de 17 de julio de 2014 (ECLI: EU:C:2014:2081) que dice:

"...42. Según el artículo 1 de esa Directiva, la misma tiene por objeto proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, su intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y permitir de este modo la libre circulación de esos datos entre los Estados miembros". En el mismo sentido ya se pronunció la STJUE de 20 de mayo de 2003, *Österreichischer Rundfunk* y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, que en su apartado 68 mantenía: "Debe añadirse que las disposiciones de la Directiva 95/46 (LCEur 1995, 2977), en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que pueden afectar contra las libertades fundamentales y, en particular, contra el derecho a la intimidad deben ser interpretados a la luz de los derechos fundamentales que, según una reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 6 de marzo de 2001, *Connolly/Comisión*, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, apartado 37)".

"....71. A este respecto, procede señalar que, el artículo 8 del CEDH (RCL 1999, 1190 y 1572), al tiempo que enuncia, en su apartado 1, el principio de no injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la vida privada, admite, en su apartado 2, que una injerencia de este tipo es posible en tanto en cuanto esté «prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás».

"....72 Así, para la aplicación de la Directiva 95/46 y, en particular, de sus artículos 6, apartado 1, letra c), 7, letras c) y e), y 13, procede comprobar, en primer lugar, si una normativa como la controvertida en los asuntos principales prevé una injerencia en la vida privada y, en su caso, si tal injerencia está justificada a la luz del artículo 8 del CEDH (RCL 1999, 1190, 1572).

"....73. Procede considerar, en primer lugar, que la recogida de datos nominales sobre los ingresos profesionales de un individuo, para comunicárselos a terceros, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, a este respecto, que los términos «vida privada» no debían interpretarse restrictivamente y que «ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales [...] del concepto de vida "privada"» (véase, en particular, *TEDH*, sentencias *Amann c. Suiza* de 16 de febrero de 2000, *Recueil des arrêts et décisions* 2000-II, § 65, y *Rotaru c. Rumanía* de 4 de mayo de 2000, *Recueil des arrêts et décisions* 2000-V, § 43)".

Tomando como base esta toda esta doctrina, no se puede considerar que estemos ante datos de carácter personal, por entender que los mismos son públicos y que por lo tanto no se ve afectada la intimidad del procurador demandado por el tratamiento o transmisión de dichos datos de un fichero legal a otro.

En definitiva todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

OCTAVO.- Por último, cabe dar respuesta a la petición de la demandante de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de los art.6,3, letra f), de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Corporaciones Profesionales, y del art.15, apartados 1 y 2, letra h) de la Ley 19/1997 de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. Posibilidad esta que viene contemplada en el art.35 de la Ley 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y que posibilita a un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, que considere que una norma con rango

de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, plantear la cuestión al Tribunal Constitucional; planteamiento que solo puede tener lugar en este momento, dentro del plazo para dictar sentencia. Y que en este caso procede declinar, es decir, no plantear cuestión de inconstitucionalidad alguna, por el propio tenor de la presente resolución, debiendo remitirse este juzgador a lo expuesto en los FUNDAMENTOS DE DERECHO TERCERO y CUARTO de la presente resolución, en los que se analizan los preceptos cuyo planteamiento de inconstitucionalidad pretende la parte demandante. Debe además ponerse de manifiesto que según Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 133/1987 de 21 julio: "...el art. 35 de la LOTC no obliga a que un órgano judicial plantee la cuestión cuando se lo pida una parte, sino que el planteamiento sólo ha de producirse cuando el Juez o el Tribunal de que se trate considere que la norma de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución» (fundamento jurídico segundo). El citado art. 35 de la LOTC no contiene un recurso a disposición de las partes de un proceso, del cual haya sido privado el recurrente. Por el contrario, la cuestión de inconstitucionalidad es un medio para asegurar la supremacía de la Constitución, que corresponde en forma exclusiva al órgano judicial. La decisión de este respecto al planteamiento de la cuestión no afecta, pues, al derecho de defensa de los derechos fundamentales de las partes ante el Tribunal Constitucional, ya que éstas disponen a tal fin del recurso de amparo. La circunstancia de que las partes y el Fiscal deban ser oídos antes del planteamiento de la cuestión de Inconstitucionalidad, invocada por el recurrente en apoyo de su pretensión, no significa en modo alguno que ellos tengan un «derecho» a que los órganos expresen dudas sobre la constitucionalidad de la norma aplicable y por consiguiente utilicen este medio jurídico de protección de la supremacía del derecho constitucional. Y a este juzgador no le ofrece duda la constitucionalidad de las normas referidas.

NOVENO.- La desestimación de la demanda conlleva la imposición de las costas procesales a la partes demandantes.

Vistos los preceptos mencionados y demás de necesaria y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimar la demanda interpuesta por la procuradora D^a,
 , en nombre y representación de D.
 , D^a,
 y D.
 a la que se han adherido como demandantes la
 procuradora de los tribunales, D^a,
 en nombre y
 representación de la
 , D^a,
 D.
 D.

D. _____, D. _____, D. _____,
D. _____, D. _____, D. _____,
y D. _____, así como D. _____, con
imposición a los referidos demandantes de las costas del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes del presente procedimiento. Y
regístrese en los libros de este juzgado.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en este juzgado en el plazo
de 20 días a contar desde la notificación de la misma.

Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma Oscar Crespo Nagore,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Coslada, en
virtud del art.194 de la LEC.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el juez que la
suscribe. Doy fe

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo
previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los
derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.